

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SETENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C. Convertido
Transitoriamente en **JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) DE PEQUEÑAS**
CAUSAS Y COMPETENCIA

PROCESO: Ejecutivo. No. 11001-4003-070-2019-00081-00

Siete (7) de mayo de Dos mil veintiuno (2021)

Procede el despacho a desatar el **RECURSO DE REPOSICIÓN** y subsidiario de **APELACIÓN** presentado por la demandada **ALIDE LIZARAZO CORZO** en contra del auto de data Veintiséis (26) de octubre de 2020 por medio del cual se dejó sin valor y efecto el proveído de fecha 28 de febrero de 2020 y se requirió a la partes para el pago de expensas en torno a la prueba grafológica decretada.

ANTECEDENTES

Solicita en breve síntesis la recurrente que, se abstenga el despacho de revocar el auto de data 28 de febrero de 2020, esto por cuanto la decisión por demás le resulta extraña, atendiendo a que, los motivos esbozados en proveído objeto de censura no fueron abordados en el auto revocado.

Agrega que, desde su notificación expuso que el titulo valor no llenaba los requisitos, que la firma impuesta no resultaba de su autoría, la letra carecía de aceptación y la cédula allí relacionada pertenencia a otra ciudadana como se puede corroborar ingresando a las páginas públicas de antecedentes penales; que igualmente, resulta evidente la inconsistencia entre la suma señalada en la demanda con la contenida en el titulo valor, motivo por el cual no comprende como se pudo librar mandamiento de pago ante tantas irregularidades.

Añade que, desde que tuvo conocimiento de la demanda indicó que no conocía a la demandante y que jamás suscribió el título valor aportado.

Expone de igual forma, que la prueba oficiosa decretada debe ser practicada por el Instituto de Medicina Legal Y Ciencias Forenses, de suerte que, no genere costo o emolumento alguno. Que, el despacho sin respaldo probatorio deja sin valor y efecto una decisión que negaba los recursos oportunamente interpuestos y la muestra caligráfica para ser cotejada.

Por lo expuesto, solicita reponer el auto objeto de censura, y en consecuencia mantener la prueba de oficio consistente en dictamen caligráfico el cual debe ser adelantado por el Instituto de Medicina Legal Y Ciencias Forenses sin que se genere cobro alguno, lo anterior, atendiendo a que no cuenta con los recursos económicos a fin de sufragar la experticia, motivo por el cual solicita de persistir la prueba, se le conceda el amparo de pobreza consagrado en el artículo 151 del C.G.P.

CONSIDERACIONES

El recurso de reposición como medio de impugnación procede contra los autos que dicte el juez a fin de que los revoque o reforme de conformidad con lo normado en el Art. 318 del C. G. del P., por ello la censura debe encaminarse a mostrar las falencias de la decisión que en cada caso se adopta, sin que sea admisible ir más allá del objeto propio de este mecanismo procesal.

Dispone el numeral 4º del artículo 42 del Código General Proceso como deberes del juez: *Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes.*

En dicho sentido, lo primero que ha de manifestarse es que, si bien la aquí demandada solicitó en contestación a la demanda adosada a folio 9 prueba grafológica a costas de la parte demandante, lo cierto es que, no dio cumplimiento a los requerimientos efectuado en proveído de data 28 de mayo de 2019 (fl.17) y 30 de julio de 2019 (fl.25) lo que conllevó en principio a tener por desistida la prueba.

Ahora, atendiendo al deber que le asiste al juez de velar por la búsqueda de la verdad y ante la falta de diligencia de la demandada al asumir la carga probatoria, de manera diligente este despacho decretó de oficio la prueba grafológica tal como se indica a folio 45.

De otra parte, si bien en proveído de data 26 de octubre de 2020 (fl.50) se dejó sin valor y efecto el auto de fecha 28 de febrero de 2020, de manera alguna el despacho prescinde de la prueba de oficio, por el contrario, con fundamento en lo normado en el numeral 3º del artículo 270 y 169 del Código General del Proceso, la actuación se ajustó a dichos postulados, siendo necesario a la luz de esta normatividad proceder primero con la reproducción del documento tachado de falso, posteriormente efectuar el pago de gastos provisionales al perito, para finalmente dar paso al dictado grafológico, de donde por demás ha de concluirse, contrario a lo manifestado por la recurrente, que la decisión estuvo sustentada en debida forma.

Ahora, en lo que atañe a remitir la Prueba grafológica al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en proveído de data 30 de julio de 2019 se indicó que ante la ausencia de documental en original con la cual se pudiera realizar el cotejo de la firma tachada de falsa resultaba imposible el envío de la prueba a dicha entidad, esto por cuanto, en casos análogos se han devuelto este tipo de experticias por insuficiencia de material documental para cotejar.

Aunado lo anterior, es importante que la demandada conozca que el envío de la prueba grafológica al Instituto de Medicina Legal Y Ciencias Forenses, no exceptúa a las partes del pago de la experticia, por el contrario, dicha entidad no da trámite a la misma sino una vez cancelados sus honorarios.

Conclúyase entonces que, la labor del despacho que tilda de extraña la recurrente, ha buscado ajustarse a la normatividad legal vigente y con fundamento en el conocimiento adquirido en procesos similares se ha pretendido brindar celeridad al proceso, precaviendo trámites infructuosos.

De igual manera, resulta fundamental advertir que del resultado del dictamen grafológico depende el éxito de la tacha de falsedad planteada por la demandada y con ello de su defensa, de suerte que, conforme a lo normado en el numeral 8° del artículo 78 del C.G.P., le asiste el deber de prestar colaboración para la práctica de pruebas, máxime cuando la principal beneficiada con las resultas de la misma es la ejecutada.

En otra instancia, en lo que atañe a la falta de cumplimiento del título valor aportado de los requisitos esenciales que les son propios, la demandada según lo dispone el artículo 430 del C.G.P., debió dentro de la oportunidad procesal alegar la ausencia de dichos presupuestos, no siendo ésta la oportunidad para debatir respecto a los mismos.

Conclúyase de lo anterior que, el auto objeto de censura se encuentra ajustado a derecho, motivo por el cual no se accederá a su revocatoria, empero, ante la solicitud de amparo de pobreza se concederá el mismo en auto separado, situación por la cual la demandada se exonera del pago de la suma decretada en proveído del 26 de octubre de 2020.

En mérito de lo expuesto en líneas anteriores, el **JUZGADO SETENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.** Convertido Transitoriamente en el **JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE** esta Ciudad

RESUELVE

PRIMERO: NO REVOCAR el auto de data 26 de octubre de 2020 por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

Notifíquese y cúmplase, (2)

FIDEL SEGUNDO MENCO MORALES
JUEZ

Notificación por estado: la providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No. 15 hoy 10 de mayo de 2021
La Secretaria LYNDA LAYDA LÓPEZ BENAVIDES

Firmado Por:

**FIDEL SEGUNDO MENCO MORALES
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 070 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

0fded8927a4953fbbcd91b02f1d2c31d861591451a4e7f0df1124ed9ead29694

Documento generado en 07/05/2021 04:43:37 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**